

PROPUESTAS ECONÓMICAS A TRAVÉS DE CONQUISTAS SOCIALES.

Claudio Katz.

1. La Argentina comparte con todos los países periféricos los efectos de cualquier temblor económico internacional. Es vulnerable a aumentos de las tasas de interés que encarecen el pago de la deuda, a caídas de los precios de las materias primas que agravan el déficit comercial o a cesaciones de pagos que desatan fugas de capital. Esta fragilidad es producto de la inserción capitalista dependiente en la actual división internacional del trabajo. El giro hacia la especialización exportadora de insumos agrícolas e industriales en desmedro del mercado interno acentuó la desprotección del país ante las conmociones externas.

Los economistas neoliberales afirman que la globalización impide adoptar medidas elementales de defensa frente a estas crisis cómo el control de cambios y de los flujos de capital, olvidando que cada paso hacia la mayor desregulación incrementa la vulnerabilidad de la economía. En todas sus expresiones, la izquierda repudia esta actitud servil. Pero, además, hay que evitar la contaminación fatalista discutiendo y propagandizando las medidas alternativas que servirían tanto para frenar el despojo del país, cómo para abonar la lucha por el socialismo.

2. El modelo vigente se apoya en el aumento de la explotación de los trabajadores y en un cambio de hegemonía dentro del bloque dominante. Se ha consumado, por un lado, una terrorífica redistribución del ingreso que redujo el salario real a la mitad en veinte años. Por otra parte, los bancos, las corporaciones transnacionales y los grupos locales triunfantes han ganado poder en relación a la burguesía agraria e industrial tradicional. La convertibilidad ha sido tan sólo un instrumento de estos cambios sociales, cómo lo demuestra la implementación de transformaciones semejantes con otras políticas monetarias y cambiarias, en México, Brasil o Chile.

Pero el anclaje del peso con el dólar para brindar seguridades a los acreedores ha neutralizado los mecanismos habitualmente utilizados para incidir sobre el ciclo. El efecto ha sido el deterioro de la competitividad, la explosión del déficit comercial durante las fases expansivas y la generalización de la deflación en los períodos contractivos. Estos desequilibrios han erosionado la confianza de la clase dominante en la convertibilidad. Un sector de los banqueros y de los dueños de las empresas privatizadas se beneficiaría con la dolarización, pero el conjunto de la burguesía perdería la posibilidad de rescatar bancos y empresas en peligro, cómo ocurrió por ejemplo durante el Tequila. La devaluación es el programa de los grupos industriales y agrarios desplazados, que apuestan a una recuperación siguiendo el rumbo adoptado por México o Brasil.

En la izquierda no existen dudas sobre el carácter reaccionario de la dolarización. Pero algunos partidos (PH) y economistas (Calcagno) progresistas consideran inevitable la devaluación y proponen amortiguar su impacto popular con medidas selectivas de seguro y desagio. Estas propuestas parten de un falso diagnóstico desarrollista, que sitúa el origen de la crisis en la "pérdida de competitividad" y no en la agresión contra los trabajadores y además, son ilusorias. Sólo la nacionalización previa de los bancos permitiría proteger el salarios y a los pequeños deudores de una devaluación, que no es conveniente ni necesaria para los trabajadores.

3. La rebaja salarial a los empleados públicos no constituye el "último ajuste", porque la Argentina es el país latinoamericano que soporta mayor variabilidad de su nivel de actividad y los capitalistas reaccionan con atropellos, frente a cualquier síntoma de inestabilidad. Por eso es probable que el gobierno haya "sobreactuado" la actual crisis fiscal, para imponer un "sobreajuste" en el sector público complementario de la reforma laboral.

En la izquierda se intenta diagnosticar frecuentemente si cada ajuste es suficiente para inducir una reactivación, "si la crisis se profundizará " o si por el contrario "la burguesía encontró una salida". Acertar pronósticos de este tipo no es fácil, porque el capitalismo es un sistema sujeto a la anarquía del mercado y la economía argentina es particularmente frágil e imprevisible. Estas evaluaciones son indispensables para los empresarios (deciden dónde invertir), pero no para los militantes socialistas. Para la izquierda lo prioritario es desarrollar argumentos en favor de un programa anti-capitalista, cuya consistencia no depende de la previsión de cuánto durará la convertibilidad, ni del presagio de un estallido financiero.

4. Bajo la presión conjunta de las luchas populares (el mayor pico de huelgas desde 1988) y de los empresarios afectados por la recesión, varios políticos (Carrió, Moreau, A Castro, Martinez) han planteado medidas alternativas a la reducción salarial. Han descubierto que subiendo los aportes patronales a las empresas privatizadas, cobrando los canones adeudados e implantando algún impuesto a la renta financiera (exenta sólo en la Argentina) se puede recolectar la suma confiscada a los empleados públicos. La respuesta del gobierno alertando contra una suba de tarifas o una fuga de capitales es ridícula, en el país que ostenta el récord mundial de costos de los servicios y mantiene casi 100.000 millones de dólares depositados en el exterior.

A diferencia de los peronistas y radicales que se acuerdan de plantear la conveniencia de algunos impuestos progresivos cuándo están enemistados con el gobierno, la izquierda reivindica permanentemente esta solución inmediata para el bache fiscal. Frente a una evasión anual de 35.000 millones de dólares (es decir, siete veces el déficit fiscal) este cobro permitiría financiar varias acciones de emergencia contra la pobreza y el desempleo. La evasión perdura porque constituye un mecanismo informal de acumulación, apañado por el propio Estado. Luchar por eliminar el IVA y gravar la riqueza es una correcta forma de desenmascarar esta complicidad y de alentar la movilización popular.

5. Los economistas de la CGT rebelde han consensuado con la UIA un plan de recomposición gradual del salario (6-8% anual) y un subsidio a los desocupados. Ambos beneficios surgirían de una reactivación de la demanda, derivada a su vez de subsidios a las empresas que operan en el mercado interno. Pero en este programa el aumento salarial no es inmediato y depende de una respuesta positiva de los "empresarios nacionales" a los estímulos que ofrezca el estado. Es un plan capitalista, que mantiene invariable la flexibilización y la rebaja de aportes patronales. No cabe duda que la izquierda debe rechazar este típico programas de "concertación " con la burguesía., al que se debe oponer las reivindicaciones de los trabajadores: seguro al desempleo, salario y jubilación mínima de 600 pesos y reestablecimiento de la jornada laboral de 8 horas.

Este programa es nuestro punto de partida para un proyecto anti-capitalista. Pero en la batalla por implementarlo conviene evitar la crítica infantil al objetivo de desarrollar el mercado interno, porque esta meta es complementaria y no antagónica con el inicio de una gestión socialista de la economía. No cabe duda que en un país subdesarrollado cómo la Argentina, la planificación coexistirá con la regulación mercantil de un amplio espectro de actividades durante un período muy prolongado. Y esa mixtura seguramente contemplará iniciativas en favor de las pequeñas empresas, cómo la reducción de las tasa de interés, el aumento de los aranceles o las rebajas impositivas.

6. La CTA propone un "shock redistributivo" basado en un seguro al desempleo (solventado en impuestos a las empresas privatizadas), para reanimar la demanda junto al aumento de los aranceles y la regulación estatal de ciertos precios estratégicos. Considera que partiendo de esta reactivación se podría desenvolver "otro modelo" en conjunción con los empresarios y a través de una tregua con los acreedores.

Esta estrategia es nociva para la obtención de los reclamos populares, porque conduce a alianzas con los capitalistas intermediadas por la iglesia, que implican la desmovilización o la renuncia a las reivindicaciones que perturben a este "pacto social". Pero la exigencia de un seguro al desempleo es totalmente legítima y puede conquistarse a través de la movilización consecuente.

Algunos compañeros opinan que la obtención de mejoras parciales de este tipo resulta imposible bajo el capitalismo y por eso proclaman que la única opción es el "socialismo o la barbarie". Esta suposición es equivocada. Especialmente en un país de los recursos de la Argentina, la recuperación de logros sociales del pasado depende principalmente de la forma en qué se oriente la lucha social. No sólo es posible obtener conquistas significativas bajo el régimen actual, sino que su logro resulta indispensable para recomponer la cohesión social de los trabajadores y restaurar la confianza en la acción sindical. Si la izquierda no participa de esta batalla, liderando luchas y conquistando autoridad, el socialismo será un sueño inalcanzable.

7. La deuda externa es un tema insoslayable de la discusión económica, porque constituye un monumental obstáculo para el progreso del país (consume tres veces más del presupuesto que hace 10 años). Como es evidente que las privatizaciones acentuaron en vez de reducir la hipoteca, la propuesta de "no pagar" ha comenzado a recuperar popularidad. No es para nada "simplista" como cree Verbistky, demostrar todo lo que podría realizarse en el campo de la salud o la educación, si cesara el pago. Pero conviene aclarar varios problemas.

En primer lugar, el capitalismo y no la deuda es el "mal de todos los males" y su pago no es más pernicioso que las fortunas amasadas, por ejemplo, por los cuatro argentinos que figuran en el club de 200 billonarios del mundo (PCompanc, Fortabat, Noble y Rocca). Algunos economistas como Basualdo han incluso calculado que las transferencias de utilidades al exterior de las empresas radicadas en el país superaron en la última década el pago de intereses. En segundo lugar, dejar de pagar no es una condición para cualquier mejora de los trabajadores. Es indispensable para poner en marcha una reorganización provechosa de la economía pero no para revertir la reciente poda salarial, que podría remontarse con medidas mucho menos radicales. En tercer lugar, no hay que confundir el "no pago" voluntario con la "cesación de pagos" impuesta por la crisis. Qué Rusia o Ecuador se queden sin divisas y entren en moratoria no representa ningún triunfo popular. La izquierda no tiene por qué hacerse cargo del descalabro que generan las situaciones que padeció Argentina en 1988-90 o Perú bajo Alan García. En cuarto lugar, una moratoria aislada puede servir de instrumento para renegociar con los acreedores nuevas medidas de agresión a los trabajadores, como por ejemplo propone el diputado Allende de la UCR. El "no pago" es una medida para recuperar soberanía en el manejo de la política económica y es positiva si se adopta junto a otras iniciativas (como la anulación de las privatizaciones). Pero resulta estéril en una alianza con la burguesía bajo el programa de "FMI o pueblo".

8. La izquierda necesita demostrar que propone la alternativa más favorable y menos dolorosa para los trabajadores, a través de un programa que vincule las conquistas inmediatamente posibles con el proyecto del socialismo. Hoy ya no enfrentamos la generalizada ilusión en el neoliberalismo, pero si la masiva creencia en la conveniencia de "otro modelo de capitalismo". Ilustrar de qué forma lo que obtengamos hoy prefigura la sociedad más igualitaria del mañana debe ser el objetivo de nuestro programa económico.

